



## SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL

Acta N° 39

**Proceso:** ORDINARIO LABORAL  
**Demandante:** CARLOS MARIO HURTADO LONDOÑO  
**Demandado:** COLFONDOS S.A. y OTROS.  
**Procedencia:** JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE ITAGÜÍ  
**Radicado N°:** 05360-31-05-002-2017-00005-01 (19-198)

En Medellín, a los trece (13) días del mes de julio de dos mil veinte (2020), en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 15 del Decreto Legislativo No 806 del 04 de junio de 2020, y en consonancia con el artículo 10 del Acuerdo PCSJA20-11567 05/06/2020 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, los magistrados integrantes de la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, **VICTOR HUGO ORJUELA GUERRERO, SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE y CARLOS JORGE RUIZ BOTERO**, una vez discutido y aprobado el respectivo proyecto de sentencia, procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por COLFONDOS S.A., dentro del proceso ordinario instaurado por **CARLOS MARIO HURTADO LONDOÑO** en contra de **COLFONDOS S.A., MISIÓN EMPRESARIAL S.A., WASH S.A.S., JUNTAS REGIONAL Y NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ, y MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A.** como llamada en garantía, radicado bajo el N° 05360-31-05-002-2017-00005-01 (19-198).

Se deja constancia que el respectivo proyecto de fallo fue puesto a consideración de la Sala, y estando debidamente aprobado, se procede a dictar la siguiente sentencia que en derecho corresponda.

### 1. ANTECEDENTES

Actuando por intermedio de apoderada judicial, el demandante persigue se declare la existencia de una relación laboral con la empresa Misión Empresarial S.A. bajo la modalidad de contrato de trabajo a término indefinido entre el 01 de febrero de 2010 hasta la actualidad como trabajador en misión para WHASH S.A.S., y en consecuencia, solicita que las accionadas sean condenadas de manera solidaria al reconocimiento y pago de las acreencias laborales y prestaciones sociales relacionadas en el libelo genitor, así como también la sanción por no pago de las cesantías a un fondo, la sanción por no pago de prestaciones sociales, la sanción por no pago de intereses a las cesantías, las incapacidades médicas que se dejaron de cancelar; de igual manera, pretende que se

deje sin efectos los dictámenes emitidos por COLFONDOS S.A., la Junta Regional y Nacional de Calificación de Invalidez, y se declare que cuenta con un pérdida de capacidad laboral del 52 % de origen común y con fecha de estructuración del 14 de diciembre de 2016, ordenándose a COLFONDOS S.A. que reconozca la pensión de invalidez, incluidas las mesadas adicionales, la indexación y las costas procesales, con fundamento en que celebró un contrato de obra o labor determinada con la empresa Misión Empresarial para prestar sus servicios como trabajador en misión en la sociedad WASH S.A.S. desde el 01 de febrero de 2010, vínculo laboral que aún se encuentra vigente; que las funciones son las de operario de lavado, devengando un salario de \$ 892.000; que el 20 de septiembre de 2010 sufrió un accidente de trabajo que le ocasionó incapacidad de 3 días con el diagnóstico de lumbalgia; que posteriormente sigue con fuertes dolores e incapacidades; que para el mes de enero de 2012 lo reubicaron en la sección de bisutería, pero su situación de salud empeoró, razón por la cual continuó incapacitado por su EPS COOMEVA; que el 10 de mayo de 2012 es evaluado por COLFONDOS S.A. quien determinó una PCL del 18 % de origen común y con fecha de estructuración del 16 de noviembre de 2011; que agotó la vía gubernativa y fue evaluado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia el 13 de febrero de 2013, entidad que determinó una PCL del 29.23 % de origen común y con fecha de estructuración del 16 de noviembre de 2011, dictamen confirmado por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez el 23 de enero de 2014; que el 30 de enero de 2014 se reintegró a sus labores con recomendaciones laborales, pero tal reintegro fue fallido por persistir los dolores, situación que le ha generado incapacidades constantes, acumulando 1.887 días hasta el 19 de enero de 2017, estando pendiente una nueva calificación por parte de COLFONDOS S.A.; que por vía de tutela Colfondos S.A. le canceló incapacidades, pero le debe algunos periodos; que mediante comunicación de COLFONDOS S.A. del 29 de abril y 24 de junio de 2016 notificó al actor que no seguiría cancelando las incapacidades; que desde que iniciaron las incapacidades médicas la empresa Misión Empresarial no le ha cancelado las prestaciones sociales generadas por la relación laboral; que el 16 de enero de 2017 la Universidad CES calificó al actor con una PCL del 52 % de origen común y con fecha de estructuración del 14 de diciembre de 2016.

## **1.1 TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA Y CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA**

La demanda fue admitida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Itagüí mediante auto del 31 de enero de 2017 (Fl. 550), con el cual ordenó su notificación y traslado a la parte accionada.

Precisa la Sala que a través de auto del 26 de agosto de 2019 (fol. 952 y 953 Cd de audiencia) se aprobó el acuerdo conciliatorio de la totalidad de las pretensiones formuladas en lo que respecta con la sociedad WASH S.A.S. y Misión Empresarial S.A. ordenando la terminación del proceso respecto a tales codemandadas, y continuando el proceso solo en lo atinente a la pensión de invalidez.

En lo que interesa COLFONDOS S.A. contestó la demanda el 16 de marzo de 2017 (Fols. 574 a 582), oponiéndose al reconocimiento de la pensión de invalidez, con fundamento en que el actor no acredita los presupuestos normativos, esto es, ser una persona inválida con disminución de por lo menos el 50 % de su capacidad laboral, aspecto que no permite ni siquiera analizar los demás presupuestos para el otorgamiento de la prestación reclamada. Propuso como excepciones de mérito las que denominó inexistencia de solicitud de reconocimiento de pensión de invalidez frente a Colfondos S.A., inexistencia de las obligaciones demandadas, es imprescindible la evaluación de los demás requisitos exigidos legalmente, finalidad del acceso a la jurisdicción ordinaria como mecanismo para controvertir el dictamen de la Junta Nacional, variación de la condición clínica del paciente con posterioridad al dictamen de la Junta Regional no puede afectar a Colfondos S.A., plena validez de los dictámenes emitidos – inexistencia de la declaratoria de nulidad, unidad de criterio en los dictámenes rendidos, pérdida de capacidad laboral como consecuencia de un accidente de trabajo, imposibilidad de las pretensiones frente a Colfondos S.A., buena fe, prescripción, compensación y la genérica.

Mediante auto del 06 de febrero de 2018 (Fol. 743) se admitió el llamamiento en garantía propuesto por COLFONDOS S.A. a MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A., entidad que una vez notificada contestó la demanda principal y el llamamiento en garantía el 05 de abril de 2018 (Fols. 771 a 793), oportunidad en la cual presentó oposición, y propuso como excepciones de mérito frente a la demanda principal las de ausencia de causa para pedir, no agotamiento de reclamación prejudicial, ausencia de causa para pedir, una petición antes de tiempo, y la inexistencia de un conflicto entre las partes, desconocimiento de normas y procedimientos para el reconocimiento de una pensión, inexistencia de las obligaciones de Colfondos S.A., ausencia de requisitos para la pensión, compensación y pago, improcedencia de los intereses moratorios, prescripción; frente al llamamiento en garantía propuso las excepciones de cláusulas que rigen el contrato de seguro, ausencia de cobertura, e improcedencia de intereses moratorios.

## **1.2 DECISIÓN DE PRIMER GRADO**

El proceso se dirimió en primera instancia mediante sentencia proferida el 26 de agosto de 2019 (fols. 952 y 955 con el CD de la audiencia), con la cual la cognoscente de instancia declaró que el señor CARLOS MARIO HURTADO LONDOÑO presenta una pérdida de capacidad laboral del 52 % de origen común y estructurada el 14 de diciembre de 2016, en consecuencia, condenó a COLFONDOS S.A. a reconocer la pensión de invalidez en favor del demandante y la suma de \$ 26.554.479 por concepto de retroactivo pensional causado entre el 14 de diciembre de 2016 y el 31 de julio de 2019; a partir del 01 de agosto de 2019 ordenó continuar pagando la pensión de invalidez en una mesada equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente, sobre 13 mesadas pensionales anuales; autorizó los descuentos al Sistema de Seguridad Social en Salud; condenó a la indexación desde la causación de cada mesada pensional hasta su pago; absolvió a la llamada en garantía MAPFRE SEGUROS DE VIDA S.A. y gravó en costas procesales a COLFONDOS S.A.

### **1.3 APELACIÓN**

La determinación adoptada en primera instancia, fue recurrida en apelación por la apoderada judicial de COLFONDOS S.A., quien disiente de la decisión adoptada en primera instancia, alegando para ello que el origen de la enfermedad no es común sino laboral, de acuerdo con lo dispuesto en el Boletín No 055 de 2007 del Ministerio de la Protección Social, el cual estableció que hasta tanto no se emita una legislación sobre la definición de accidente de trabajo debía estarse a lo definido por la CAN, la que ha definido que el accidente de trabajo es el suceso ocasionado con ocasión o con causa en el trabajo, lo que logra desprenderse de los hechos de la demanda, cuando se hace referencia a que la PCL ocurrió como consecuencia del accidente de trabajo ocurrido en ejecución de su labor, que no fue un hecho repentino, sino un hecho imprevisto en el lugar de trabajo, además que el actor manifestó en el interrogatorio de parte que sufrió un accidente de trabajo y a partir de allí continuó con las incapacidades médicas, y por tal razón, la que debe asumir el riesgo es la ARL; que en el proceso quedó demostrado que se ha presentado inconformidad con el origen de la pérdida de capacidad laboral; sin embargo, ninguna entidad ha evaluado este aspecto, como por ejemplo la Junta Nacional de Calificación de Invalidez determinó que no evalúa realmente cuál es el origen de la pérdida de capacidad laboral, inclusive en el dictamen del CES se evaluó el origen, pero se manifestó que no tenía elementos suficientes para determinar el origen, pues se requería de una evaluación por ergonomía; recalca que en caso de establecerse que el origen es común, debe tenerse en cuenta que las entidades competentes para calificar la

pérdida de capacidad laboral son el fondo de pensiones y la Junta Regional y Nacional de Calificación de Invalidez, las que emitieron un dictamen, mismo que se considera válido; que no se debe tener en cuenta el dictamen del CES porque adolece de errores, pues presenta diferencias porcentuales con el dictamen de la Junta Nacional que son relevantes para configurar la invalidez; que el perito no fue objetivo, como sucede con el ítem de la minusvalía en el que manifestó que son situaciones difíciles de calificar y que a pesar de que el actor tenía otros diagnósticos, precisó que no podían tenerse en cuenta por no contar con exámenes al respecto; sin embargo, procedió a valorar esa situación en la calificación, igualmente observó que la calificación se adecúa a la situación actual, pero no existe un argumento técnico basado en el manual de calificación; finalmente aduce que el perito aplicó por conveniencia el Decreto 917 de 1999, debiendo aplicar el Decreto 1507 de 2014, ya que al aplicar el Decreto 917 debía tener en cuenta la misma historia clínica que tuvo en cuenta las Juntas de Calificación.

Estando en la oportunidad legal COLFONDO S.A. manifiesta que debe revocarse la sentencia, ya que el accidente que sufrió el actor se enmarca en un accidente de carácter laboral, y por lo tanto, le corresponde a la administradora de riesgos laborales asumir el reconocimiento pensional; y si se confirma que el origen de la enfermedad, solicita que no se tenga en cuenta el dictamen aportado por la parte demandante, ya que adolece de errores al sobrevalorar las deficiencias, la discapacidad y la minusvalía.

Por su parte MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A. en la oportunidad para alegar manifiesta que no existe ninguna circunstancia que invalide el dictamen emitido por los órganos competentes para ello, como la JRCL y la JNCL, y por ello, no existe fundamento de carácter médico que permita incrementar el porcentaje de pérdida de capacidad laboral.

## **2. ANALISIS DE LA SALA**

Surtido el trámite en esta instancia, sin observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el extremo litigioso por pasiva, advirtiéndose que de conformidad con el principio de consonancia consagrado en el artículo 66 A del C.P.L. y S.S., el estudio del fallo impugnado se limitará a los puntos de inconformidad materia de alzada, para lo cual se plantea el estudio del siguiente:

### **2.1 PROBLEMA JURÍDICO:**

El tema *decidendi* en el asunto puesto a consideración de la Sala se contrae a dilucidar:

¿Si la invalidez calificada al señor Carlos Mario Hurtado Londoño es de origen laboral o de origen común? En caso de estructurarse como enfermedad de origen común, se determinará ¿Si hay lugar a acoger el dictamen de calificación de invalidez emitido por la Universidad CES que determinó una PCL del 52 %, con fecha de estructuración del 14 de diciembre de 2016?, en caso afirmativo, la Sala pasará a elucidar ¿Si se acreditan los requisitos legales para acceder a la pensión de invalidez?

## **2.2 TESIS DE LA SALA Y SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS JURÍDICOS PLANTEADOS**

El sentido del fallo de esta Corporación será **confirmatorio**, conforme a los planteamientos que pasan a exponerse.

### **2.2.1. PENSIÓN DE INVALIDEZ- ORIGEN DE LA ENFERMEDAD.**

No es objeto de controversia que el señor CARLOS MARIO HURTADO LONDOÑO se encuentra afiliado a COLFONDOS S.A. desde el 27 de febrero de 1998 (fols. 583 y 584); que el 23 de marzo de 2012 fue calificado por MAPFRE SEGUROS DE COLOMBIA con una pérdida de capacidad laboral del 18 % de origen común y con fecha de estructuración del 16 de noviembre de 2011 (fols. 585 y 586); que la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia mediante dictamen del 13 de febrero de 2013 aumentó la pérdida de capacidad laboral a un 29.23 % de origen común y dejando la misma fecha de estructuración que estableció MAPFRE SEGUROS DE COLOMBIA (Fols. 587 a 588); que la Junta Nacional de Calificación de Invalidez a través de dictamen del 23 de enero de 2014 confirmó el dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez en todos sus aspectos (Fols. 591 a 592); que obra dictamen la Universidad CES de enero de 2017, en la que califica al actor con una pérdida de capacidad laboral del 52 %, de origen común, con fecha de estructuración del 14 de diciembre de 2016 (fols. 45 a 58).

En orden a resolver la litis, cumple anotar por la Sala que la discusión inicial que debe resolverse es determinar si la enfermedad que padece el demandante corresponde o no a una enfermedad laboral, ante lo cual, debe tenerse en cuenta que, como quiera que COLFONDOS S.A. sostiene que el accidente de trabajo que tuvo el señor CARLOS MARIO HURTADO LONDOÑO el día 20 de septiembre de 2010 le ocasionó la enfermedad que hoy padece, y que por ello, el origen de la invalidez es laboral y no común, se debe tener en cuenta que la normatividad aplicable para la definición del accidente de trabajo es la vigente al momento de la ocurrencia del siniestro, vale decir,

para esa época la que establecía la Comunidad Andina de Naciones en la Decisión 584 de 2004, en razón a que tal disposición tuvo efectos de sustrato regulatorio hasta la expedición de la Ley 1562 de 2012 (SL654-2018); no obstante, cualquiera de las estipulaciones que se apliquen consagran la misma definición de accidente de trabajo, y así se dejó sentado en la sentencia SL2582 de 2019, cuyo tenor literal establece:

*“la definición de accidente de trabajo ha sido muy similar desde su consagración por primera vez en el ordenamiento jurídico colombiano y en las regulaciones posteriores, incluida la Decisión 584 en comento, pues básicamente, en todas ellas, se ha estipulado que es accidente de trabajo todo suceso repentino por causa o con ocasión del trabajo, que genera al trabajador una lesión orgánica, perturbación funcional, la invalidez o la muerte (...)”.*

De igual manera, el artículo 2° del Decreto 2566 de 2009 vigente para la calificación realizada por las Juntas de Calificación de Invalidez, previene que: *“en los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de enfermedades profesionales, pero se demuestre la relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacional, será reconocida como enfermedad profesional”.*

Ahora, frente a la configuración del accidente de trabajo, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL 2582 de 2019, desarrolla todo un engranaje argumentativo sobre el tema, y adocina en lo que viene al caso lo siguiente:

*“(...)En un caso similar, la Corporación reiteró que: (i) para que se presente un accidente laboral, debe existir un nexo causal entre el hecho dañoso y la prestación del servicio, ya sea de manera directa o indirecta; (ii) que si la administradora de riesgos laborales pretende liberarse de su responsabilidad, debe derruir tal conexidad, y (iii) no todo hecho que ocurra en el entorno laboral, resulta dable calificarlo siempre como accidente de trabajo, por cuanto pueden existir circunstancias que permitan desligarlo de la prestación de un servicio subordinado (CSJ SL11970-2017)”*

Igualmente, establece tal providencia que:

*“todo accidente mientras no haya sido calificado como de origen profesional, se considera de origen común, de modo que tal presunción desapareció cuando el juez, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, como podía hacerlo, lo calificó como laboral (CSJ SL 17429, 19 feb. 2002 y CSJ SL 29156, 4 jul. 2007)”.*

Descendiendo al sub examine, encuentra la Sala que no se demuestra por COLFONDOS S.A. la existencia del nexo causal entre el hecho dañoso y la prestación del servicio, pues nótese que en todos los dictámenes de pérdida de capacidad laboral, verbi gratia, MAFRE S.A., Junta Regional y Nacional de Calificación de Invalidez se establece que el origen de la invalidez es común, detallándose concretamente a folio 69 por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia que: *“nos encontramos frente a un paciente con enfermedad degenerativa de columna lumbar multinivel que compromete las carillas facetarias y los discos intervertebrales con compromiso radicular”*, lo que coincide con lo expuesto por el perito calificador de la Universidad CES, quien manifestó que la enfermedad del actor consistía en una osteocondrosis degenerativa, en la que podría influir los trabajos anteriores del actor, así como también podría hablarse de “traumas acumulativos” de las diferentes labores desplegadas por el actor a lo largo de su vida laboral; empero, concluyó que para calificar tal enfermedad como laboral no habían elementos suficientes, así como tampoco existe un estudio realizado por un profesional en ergonomía para determinar que en efecto la invalidez del actor sea considerada como de origen laboral.

Igualmente, no desconoce la Sala que en efecto el actor presentó un incidente en su lugar de trabajo el día 20 de septiembre de 2010, el que se relata en la historia clínica de folio 226, que consistió en que, al sacar “bluyines mojados” de la lavadora “sintió un tirón en la región lumbar”, y a partir de allí ha presentado incapacidades continuas (fols. 90 a 207 y 218 a 219). Pese a ello, por sí solo no se logra configurar la relación causa-efecto entre el factor de riesgo y la enfermedad de que trata el artículo 2 del Decreto 2566 de 2009 para catalogar la enfermedad que sufre el actor como laboral, pues tanto la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia como el perito de la Universidad CES coinciden en que se trata de una enfermedad degenerativa, y considera la Sala que, si bien tal incidente desencadenó su estado incapacitante de allí en adelante, ello ocurre, como lo dijo el perito evaluador, por traumas varios en los diferentes trabajos que ha desempeñado el actor en su vida laboral, siendo que efectivamente el actor en el interrogatorio de parte dio cuenta de que antes de laborar como operario de lavado, trabajó prestando sus servicios como coterero, cajero, y ayudante de construcción, lo que permite inferir de forma meridiana que le asiste razón al perito evaluador del CES en calificar el origen de la invalidez como común, y por contera, despachar desfavorablemente la súplica incoada por COLFONDOS S.A al respecto, dado que ante la inferencia lógica de que todo accidente mientras no haya sido calificado como de origen profesional, se considera de origen común, le correspondía a COLFONDOS S.A. derruirla, allegando elementos acreditativos que demeriten los dictámenes incorporados en el proceso que dieron cuenta que el origen de la invalidez es



común y no laboral, por demás que no logra demostrar la relación de causalidad entre el incidente laboral y la enfermedad que aqueja al actor.

Por otra parte, en lo que respecta a que las entidades competentes para calificar la invalidez sean la AFP y las Juntas Regional y Nacional de Calificación de invalidez, cumple acotar que inveteradamente la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 25 de mayo de 2005, rad. 24223, replicada en proveído SL18016 del 6 de diciembre de 2016, adocina que pese a que los falladores de instancia gozan de libertad para valorar las pruebas conforme el artículo 61 del C.P.T y S.S, cuando *“lo hacen respecto de un medio probatorio, como el dictamen emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez, será de perentoria observancia adoptarlo...”, (...)* *“sin perjuicio de lo que puedan deducir de otras pruebas aportadas al proceso y que en un momento dado les ofrezcan una mejor o mayor convicción, por corresponder a la verdad que emerge del proceso.”*

Así mismo, ha delineado que el juzgador puede apartarse de la calificación de invalidez proveniente de las juntas, *“«...porque exhiba una equivocación grave o porque los razonamientos del perito encierren una infracción legal...» (CSJ SL3090-2014), empero, “debe apoyarse en otras pruebas que le ofrezcan una mejor convicción, pero no tasar arbitraria e inconsultamente el estado de invalidez”.*

De igual manera, debe tenerse en cuenta las previsiones legales contenidas en el Artículo 241 del C.P.C, hoy 232 del C.G.P, según las cuales el juez: *“apreciará el dictamen de acuerdo con las reglas de la sana crítica, teniendo en cuenta la solidez, claridad, exhaustividad, precisión y calidad de sus fundamentos, y las demás pruebas que obren en el proceso”.*

Con los anteriores basamentos jurídicos y jurisprudenciales, estima la Sala que, la conclusión de la cognoscente de instancia se considera acertada, puesto que ciertamente el dictamen de la Universidad CES (Fls. 46 a 58), en el que se asigna un porcentaje de un 52 % de PCL, con fecha de estructuración del 14 de diciembre de 2016, ofrece mayor precisión respecto de la situación de salud del actor, pues nótese que la diferencia que presenta con el dictamen de las Juntas de Calificación Regional y Nacional, lo es en cuanto a la minusvalía, pues mientras aquellas estiman que lo es del 10 %, la Universidad CES precisa que le corresponde el 24 %, cuyo sustento señaló el perito evaluador en audiencia, en cuanto que el dictamen emitido por él refleja la invalidez material del actor, en la medida en que el actor cuenta con mal pronóstico de su patología, y además no

puede desconocerse que lleva más de 7 años con incapacidades continuas, aspecto que refleja una minusvalía ocupacional seria y compleja, al punto de no poderse reintegrar al trabajo; de suerte que, que tales incapacidades sucesivas no conllevan a establecer que haya una simulación del dolor como lo calificó la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, sino que en su concepto es una magnificación del dolor, pero que por el cúmulo de incapacidades otorgadas por la EPS y el reintegro fallido a sus labores con recomendaciones, se descarta una simulación voluntaria del dolor por parte del actor, aunado a que, en el examen físico no fue posible hacerle la cronometría por la dificultad que le representa estar de pie y marchar en puntas o talones.

Ahora, tal diferencia porcentual en la calificación de la minusvalía se encuentra debidamente soportada en la historia clínica que se arrió al proceso, y particularmente en el subconcepto de minusvalía ocupacional, obsérvese que la Junta Nacional de Calificación de Invalidez le asigna un porcentaje del 5 % que se encuentra clasificado en el número 42, mientras que la Universidad CES en este mismo concepto la califica con 15 % y con el código 46, criterios que una vez consultados en el Decreto 917 de 1999, el número 42 que utilizó la Junta Nacional de Calificación de Invalidez corresponde a *“Ocupación adaptada”*, lo que significa que *“El individuo se encuentra en un estado en el cual, como consecuencia de la enfermedad o el accidente y luego de la rehabilitación integral, es capaz de desempeñar su labor habitual, con modificaciones del puesto de trabajo y/o con aditamentos, o en otra ocupación con tareas similares, en condiciones competitivas, pudiendo trabajar durante toda la jornada laboral”*; mientras que el código 46 que utilizó la Universidad CES hace relación a *“Sin posibilidades de ocupación”*, que consiste en que: *“El individuo se encuentra en un estado tal, como consecuencia de la enfermedad o el accidente y después de la rehabilitación integral, que no está en condiciones de desarrollar actividades laborales ni para ocupar su tiempo”*, último de estos criterios que se acompasa con la situación actual del estado de salud del actor, ya que precisamente a folios 214 y 215 la EPS COOMEVA expide un concepto de rehabilitación para reintegro laboral, pero que una vez reintegrado el actor a sus labores continuó con incapacidades, por lo menos hasta el 26 de marzo de 2016 (fol. 218), aunado a que, a folio 510 obra una consulta en la IPS Universitaria de la Universidad de Antioquia datada el 8 de agosto de 2014, en la que se indica: “motivo de consulta”: “problemas de columna” y “conducta”: “paciente con condición crónica de difícil manejo”.

En ese orden, la Sala considera que, ante la imposibilidad material de reintegrarse el actor a sus labores y sus incapacidades continuas o sucesivas por más de 7 años, se encuentra ajustado el dictamen del CES en lo que corresponde a los ítems que llevan a la

sumatoria de la minusvalía, así como también lo relativo a los diagnósticos que hacen parte de las deficiencias, esto es, “hernia de disco inoperable” y “dolor persistente somatomorfo” (fol. 56).

Ahora bien, COLFONDOS S.A. aduce que el perito evaluador manifestó que el actor tenía otras enfermedades pero que al carecer de valoraciones o conceptos médicos en la historia clínica no podía formar parte de la calificación; no obstante, procedió a valorar esos aspectos en la calificación que realizó, ante lo cual, esta Sala avizora que no existe infracción al Manual de Calificación, ya que precisamente el perito José Manuel Méndez fue explícito al rendir la sustentación del dictamen en torno de que las otras enfermedades como “comorbilidad de gastritis crónica y pérdida visual de ojo derecho” no fueron tenidas en cuenta por no existir elementos de convicción que permitan su calificación como patología independiente, es decir, tales enfermedades no forman parte del capítulo de deficiencias, pues dentro de tal concepto solo se enmarca la hernia de disco inoperable y el dolor persistente somatomorfo, e inclusive adujo el perito calificador que de existir diagnósticos médicos para la evaluación de la pérdida visual su calificación habría subido en un 20 %, pero como se dijo, tales enfermedades no se encuentran calificadas en el ítem de deficiencias.

Considera la Sala que, al margen de lo anterior, si bien las enfermedades que pueda tener el actor no forman parte de la calificación de pérdida de capacidad laboral, en tanto que no afecta la sumatoria de la deficiencia, lo cierto es que, sus diagnósticos reportados en la historia clínica sí influyen en la calificación de la minusvalía, pues precisamente en materia de calificación de invalidez se ha acuñado el concepto de calificación integral conforme lo adocina la Corte Constitucional en sentencia C- 425 de 2005, ponderado también por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, entre otras sentencias en la SL1987 de 2019, en la que asentó: *“la determinación de la pérdida de capacidad laboral, como se ha referido, debe ser integral, esto es, en la valoración el equipo calificador debe tener en cuenta todas las secuelas y patologías incluidas las anteriores, sean de origen común o laboral -concepto de calificación integral”*, aunado a que el Decreto 917 de 1999, establece en el artículo 7° que: *“Para efecto de la calificación integral de la invalidez se tendrán en cuenta los componentes funcionales biológico, psíquico y social del ser humano, entendidos en términos de las consecuencias de la enfermedad, el accidente o la edad”*, derroteros que permitían al perito calificador tener en cuenta la comorbilidad de gastritis crónica y pérdida visual de ojo derecho reportados en la historia clínica del actor para efecto de realizar la evaluación en el componente de minusvalía y discapacidad, pues a guisa de ejemplo, la pérdida visual del

ojo derecho influye al momento de calificar la minusvalía del desplazamiento, la minusvalía ocupacional, la discapacidad de locomoción y discapacidad de destreza, criterios que fueron tenidos en cuenta por la Universidad CES y que la Sala encuentra que están debidamente sustentados por el perito evaluador, sin que asome la presencia de yerros en tal dictamen como lo reprocha COLFONDOS S.A. en la alzada.

Finalmente, en lo atañadero a que el perito aplicó por conveniencia el Decreto 917 de 1999, debiendo aplicar el Decreto 1507 de 2014, cumple precisar que la primera calificación que se le efectuó al actor acaeció el 23 de marzo de 2012 a través de MAPFRE Seguros de Colombia, fecha para la cual se aplicó el Decreto 917 de 1997, y lo propio acaeció con los dictámenes de las Juntas Regional y Nacional de Calificación de Invalidez (fols. 587 a 593), pues el último dictamen fue del 23 de enero de 2014, fecha para la cual ni siquiera se había expedido el Decreto 1507 del 12 de agosto de 2014 o nuevo Manual Único para la Pérdida de Capacidad Laboral, razón por la que, aprecia la Sala, la consideración del perito José Manuel Méndez en haber calificado al actor con el Decreto 917 de 1999 no fue caprichosa ni por conveniencia, pues precisamente lo que se pretendía por la parte actora con el dictamen del CES realizado en enero de 2017, era precisamente controvertir y dejar sin efecto los dictámenes de las Juntas de Calificación, circunstancia que puede inferirse de la pretensión octava formulada en el libelo genitor, y si bien, en principio su calificación debía ceñirse a la misma historia clínica que tuvieron en cuenta las Juntas de Calificación, no lo es menos que, la calificación de invalidez debe ser integral y comprender la situación actual de la persona valorada al momento de su calificación, debidamente documentada y soportada en la historia clínica, los exámenes clínicos y de ayuda diagnóstica que reposen en el expediente.

En ese orden, existe el suficiente soporte acreditativo para concluir en que bien hizo la juzgadora de instancia en acoger el dictamen de la Universidad CES, con el cual afincó la declaratoria de invalidez del actor, pues ofrece mayor convicción, consistencia y se acompasa con la realidad que emerge del proceso.

### **2.2.2 SEMANAS PENSIÓN DE INVALIDEZ POR RIESGO COMÚN**

Contempla el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 11 de la Ley 797 de 2003, el derecho a la pensión de invalidez de quién haya cotizado 50 semanas en los últimos tres años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración, y como quiera que la fecha de estructuración lo fue el 14 de diciembre de 2016, una vez revisada la historia laboral de cotizaciones en el sistema general de pensiones vista a folios 208 a 210,

se tiene que entre el 14 de diciembre de 2016 y el 14 de diciembre de 2013, acredita 128 semanas, vale decir, supera el mínimo exigido por la norma en cita.

Teniendo en cuenta que el quantum pensional reconocido, la fecha de disfrute y el retroactivo pensional dispensado por la cognoscente de instancia no fueron punto objeto de apelación, esta Sala en virtud del principio de consonancia previsto en el artículo 66 A del CPT y la S.S. ningún pronunciamiento hará al respecto y, en consecuencia, sin que haya más puntos objeto de apelación, esta Sala de Decisión pasará a impartir confirmación a la sentencia confutada en estos tópicos.

### **COSTAS**

Costas en esta instancia a cargo de la parte demandada COLFONDOS S.A. y a favor de la parte demandante, en suma equivalente a 1 SMLMV, esto es, \$ 877.803, por no haber prosperado el recurso de apelación impetrado. Las de primera se confirman.

### **3. DECISIÓN**

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLIN**, Sala Quinta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

#### **RESUELVE:**


**PRIMERO.: CONFIRMAR** la sentencia materia de apelación, proferida el 27 de agosto de 2019 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Itagüí, conforme lo expuesto en la parte considerativa del presente proveído.


**TERCERO: COSTAS** en esta instancia a cargo de la parte demandada COLFONDOS S.A. y a favor de la parte demandante, en suma equivalente a 1 SMLMV, esto es, \$ 877.803, por no haber prosperado el recurso de apelación impetrado. Las de primera se confirman.


Lo resuelto se notifica **POR ESTADOS.**


Déjese copia de lo decidido en la Secretaría de la Sala y, previa su anotación en el registro respectivo, **DEVUÉLVASE** el expediente al Juzgado de procedencia.

Se declara surtida la presente audiencia y en constancia se firma por los que en ella intervinieron.

  
VICTOR HUGO ORJUELA GUERRERO  
Magistrado Ponente

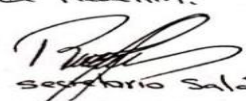
  
SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE  
Magistrada

  
CARLOS JORGE RUIZ BOTERO  
Magistrado

  
RUBÉN DARIO LÓPEZ BURGOS  
Secretario

Constancia Secretarial

Se deja constancia que las anteriores firmas corresponden a la firma original de los magistrados que integran la Sala Quinta de Decisión Laboral, de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín.

  
SECRETARIO Sala Laboral

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN  
SALA LABORAL  
SECRETARÍA

**Certifico:** Que la decisión anterior fue notificada por **ESTADOS No. 090** fijados hoy en la secretaría de este Tribunal a través de la página Web a las 8:00 a.m. Medellín, **14 de julio de 2020**

Secretario